

ASAMBLEA GENERAL



Viernes 18 de enero de 1952,

a las 15 horas

SEXTO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

Palais de Chaillot, París

SUMARIO

Página

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su tercer período de sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuestión de la definición de la agresión (capítulo III) (continuación)	235
--	-----

Presidente: Sr. Manfred LACHS (Polonia).

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su tercer período de sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuestión de la definición de la agresión (capítulo III) (continuación)

[Tema 49 b)]*

1. El Sr. KOVALENKO (República Socialista Soviética de Ucrania) hace notar que la cuestión de la definición de la agresión está íntimamente ligada a la misión fundamental de las Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la paz y la defensa de la seguridad mundial. Hay que poner obstáculos a la agresión e impedir que quede impune. El principio de no intervención es uno de los principios esenciales del derecho internacional. Cuando la intervención toma la forma de una agresión, se considera como el mayor de los delitos. Esto se ha reconocido sucesivamente en la resolución de la Octava Asamblea de la Sociedad de las Naciones del 24 de septiembre de 1928, en el Pacto Briand-Kellogg de 1928, en el Protocolo de Moscú de 1929, en las Convenciones de Londres de 1933, en la Carta de Nuremberg de 1945 y la de Tokio de 1946, y por último, en la Carta de las Naciones Unidas. Pero salvo las Convenciones de Londres, ninguno de esos instrumentos contiene una definición precisa de la agresión. Para que los órganos de las Naciones Unidas estén en condiciones de adoptar medidas eficaces contra la agresión, hay que definirla, a fin de proporcionarles instrucciones para determinar quién es el agresor y quién es la víctima. En realidad, el agresor nunca se presenta como tal, sino como víctima.

2. Por ello la delegación de la RSS de Ucrania aprueba la definición propuesta por la URSS, basada en el derecho internacional y, particularmente, en las Convenciones de Londres, que continúan en vigor. El Sr. Kovalenko recuerda los términos del proyecto de resolución de la URSS (A/C.6/L.208) que, no solamente enumera los casos de agresión, sino que cita los motivos de agresión que se invocan más frecuentemente. Agresiones como las perpetradas por Mussolini contra Etiopía y por Hitler contra Checoslovaquia, o como el

ataque del Japón contra Pearl Harbor, están comprendidas en esa definición. Los Estados agresores nunca quieren una definición precisa, porque esa definición entorpece la ejecución de sus planes. Por ello Alemania e Italia se han opuesto a ella desde 1933. Los Estados agresores estiman que a falta de una definición, sus actos quedarán impunes. Y ellos podrán acusar a sus víctimas. Así es como hoy los Estados Unidos de América acusan de agresión a China y a Corea, cuando estos países son las víctimas de la agresión norteamericana.

3. Algunos Estados se oponen a definir la agresión, pretendiendo que es empresa difícil e inútil. Tal es la actitud de los Estados Unidos y del Reino Unido. La verdad es que los Estados Unidos han tratado de justificar ciertos actos de agresión, incluso la guerra preventiva. Se ha querido trasladar al derecho internacional el ejemplo del derecho penal interno, a fin de permitir la legítima defensa. Estas argumentaciones no son sino una propaganda encaminada a disfrazar la verdad.

4. El representante de los Estados Unidos ha declarado que es inútil definir la agresión, porque no se sabe lo que es. Este argumento no resiste a la crítica. Equivaldría a esperar a que se produzca una serie de agresiones, para que la noción de agresión cristalice con el tiempo. El representante de los Estados Unidos afirmó asimismo que una definición de la agresión no será respetada por los pueblos si no existen fuerzas de policía suficientes, e hizo una comparación fuera de lugar con la ley seca norteamericana. Este argumento refleja la política de los Estados Unidos, que consideran a la fuerza como base esencial de las relaciones entre los Estados. Como justificación de la guerra preventiva, el Sr. Matthews, Secretario de Estado encargado del Departamento de Marina de los Estados Unidos, ha declarado que, para asegurar la paz, los Estados Unidos deberían obligar a los demás países a cooperar con ellos. No es pues sorprendente que el representante de los Estados Unidos haya manifestado en la Sexta Comisión que no se trata de definir la agresión, sino de saber si esta definición sería o no provechosa para los Estados Unidos. Su conclusión fué negativa, porque según la definición propuesta por la URSS, los Estados Unidos habrían sido agresores en Corea.

* Número de este tema en el programa de la Asamblea General.

5. Críticas análogas han sido formuladas por el representante del Reino Unido, quien ha tratado de introducir confusión en la noción de agresión, pretendiendo que, a fin de no entorpecer las negociaciones, sería preferible no condenar como agresor un Estado culpable de actos de agresión. El Sr. Kovalenko juzga que estas afirmaciones son contrarias a la doctrina británica y cita a propósito un texto del profesor Oppenheim. Los representantes de Bélgica y de los Países Bajos también han tratado de embrollar la cuestión y han calumniado la política exterior de la URSS.

6. La delegación de la RSS de Ucrania afirma que la Comisión de Derecho Internacional no ha cumplido su mandato, puesto que se ha negado a examinar la propuesta de la URSS¹. Igualmente, se ha negado a formular una definición enumerativa y ha preferido una definición abstracta. No ha dado definición alguna de la agresión, so pretexto de no disminuir la libertad de los órganos de las Naciones Unidas llamados a aplicar la definición. Sólo en el artículo 2 del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad (A/1858, cap. IV)², la Comisión de Derecho Internacional ha adoptado una fórmula que menciona la agresión, pero que es inútil, puesto que no la define. Dicha fórmula nada dice de actos de agresión como la declaración de guerra, la invasión sin declaración de guerra, el bombardeo de un territorio o el bloqueo naval. Ese texto da al agresor la posibilidad de eludir las consecuencias de sus delitos. El informe presentado por el Sr. Spiropoulos a la Comisión de Derecho Internacional (A/CN.4/44, cap. II), afirma que es imposible determinar *a priori* el acto directo o indirecto constitutivo de agresión, así como el grado de esa agresión. Considera que cuanto más peligrosa es la agresión y más hábil se muestra el agresor, menos posible resulta determinar al agresor. Esta tesis solamente puede servir al agresor. El representante de Grecia la ha repetido en la Sexta Comisión, convirtiéndose en abogado de la guerra de agresión. El Sr. Kovalenko declara que eso es fundarse en las teorías de Hobbes, Nietzsche y de Spengler, que inspiraron a los fascistas alemanes. Esas teorías son aceptadas por John Dewey, que afirma que el instinto bélico es inherente al ser humano; pero los pueblos pacíficos las condenan.

7. Lo mismo que los hitlerianos y los japoneses, el representante de Grecia ha afirmado que el agresor no es el que ataca primero, sino el que tiene la intención de atacar. Este argumento no es de buena fe. El representante de Grecia ha sostenido asimismo que en la definición propuesta por la URSS no se prevé como agresión la ayuda a bandas armadas. Basta leer el inciso f) del párrafo 1 del proyecto de resolución de la URSS para comprobar que ese caso está previsto.

8. Las afirmaciones inexactas del representante de Grecia han encontrado eco en el proyecto de su delegación (A/C.6/L.206). El Sr. Kovalenko pone de relieve una contradicción entre su tercer considerando, según el cual parece imposible dar una definición de la agresión, y el cuarto, del que resulta que tal definición es teóricamente posible. El cuarto considerando indica que la definición de la agresión incitaría a un agresor eventual a eludirla. El Sr. Kovalenko declara que, por el contrario, la falta de definición es lo que permite al agresor eludir las consecuencias de su acto. Estima igualmente falso decir que tal definición limitaría

la libertad del Consejo de Seguridad; piensa, por el contrario, que el Consejo de Seguridad estaría en mejores condiciones para adoptar las medidas previstas en la Carta.

9. Para terminar, el Sr. Kovalenko recuerda que el representante de la URSS ha citado a eminentes juristas internacionales que afirman la utilidad de una definición de la agresión. Considerando que la paz y la seguridad de los pueblos dependen de la adopción de una definición, la delegación de la RSS de Ucrania votará en favor del proyecto de resolución de la URSS.

10. El Sr. EL BARAZI (Arabia Saudita) considera que, como la cuestión que examina la Comisión ha suscitado ya tantas intervenciones brillantes, es conveniente cerrar el debate general lo antes posible y tomar una decisión. Por consiguiente, sus observaciones se limitarán al examen de los proyectos de resolución sometidos a la Comisión, que reflejan las tres actitudes sostenidas en el curso de este debate.

11. El proyecto de resolución de Grecia (A/C.6/L.206) está apoyado principalmente por los representantes de los Estados Unidos y del Reino Unido, cuyas delegaciones se opusieron ya a la definición de la URSS en la Primera Comisión, en el quinto período de sesiones de la Asamblea General. Dichas delegaciones invocaron la imposibilidad de formular una definición ideal y estimaron que ninguna definición aprobada por la Asamblea General podría ser impuesta al Consejo de Seguridad. El Sr. El Barazi piensa que no se trata de dar una definición inmutable, puesto que el derecho es esencialmente vivo y susceptible de progreso, ni de imponer al Consejo de Seguridad una definición que suprima toda facultad de apreciación.

12. El Sr. El Barazi rinde homenaje a los esfuerzos desplegados por la Comisión de Derecho Internacional en el cumplimiento de su misión. Estima que el representante de Grecia no examinó la cuestión con criterio realista cuando, en la 279a. sesión, declaró que, aun en el caso de que se adoptara una definición incompleta e imperfecta, no sería un órgano jurídico el llamado a aplicarla, sino un órgano político. El orador piensa que, por el contrario, ésta es razón suficiente para no ligar al Consejo de Seguridad por una definición analítica o por una definición sintética.

13. El representante de Grecia ha declarado que la agresión es una "noción natural" que escapa a toda definición. El Sr. El Barazi considera que la justicia es igualmente una noción natural y que, puesto que el derecho no es otra cosa que la justicia interpretada teniendo en cuenta el medio ambiente, sería imposible, según esta teoría, declarar el derecho.

14. El representante de los Estados Unidos ha dicho que no es oportuno cristalizar el derecho en materia de agresión, mientras su evolución no haya terminado. El Sr. El Barazi estima más prudente completar la Carta que permanecer a la expectativa. La misión de la Asamblea General consiste en impedir que el derecho internacional, todavía en estado embrionario, nazca muerto. Por todas estas razones, la delegación de la Arabia Saudita votará contra el proyecto de resolución de Grecia.

15. Examinando el proyecto conjunto de resolución presentado por Francia, el Irán y Venezuela, (A/C.6/L.209), el Sr. El Barazi lamenta que en él se proponga esperar a que la Asamblea General estudie el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, para definir la agresión. Además, el orador considera que es superfluo pedir a los Estados Miembros que,

¹ Véanse los *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, quinto período de sesiones, Anexos, tema 72 del programa, documento A/C.1/608/Rev.1.

² *Ibid.*, sexto período de sesiones, Suplemento No. 9.

cuando transmitan al Secretario General sus observaciones sobre el proyecto de código, expresen sus opiniones sobre el problema de la definición de la agresión; en el curso de los debates, los representantes de los Estados Miembros han formulado todas sus observaciones, y de nada serviría esperar, si es posible encontrar ahora una solución para el problema.

16. No obstante, el Sr. El Barazi indica que estas observaciones no prejuzgan en modo alguno la actitud de la delegación de Arabia Saudita, que se reserva el derecho de votar en favor del proyecto conjunto de resolución, si la evolución del debate no aporta una solución mejor.

17. En cuanto al proyecto de resolución de la URSS (A/C.6/L.208), el Sr. El Barazi declara que su delegación aprueba las partes A y B del párrafo 2, pero no podrá votar en favor de la totalidad del proyecto. Estima que una fórmula enumerativa no puede englobar todos los casos de agresión. El orador desea que se apruebe una solución en que se combinen la fórmula enumerativa y la abstracta. De este modo se tendría, por una parte, una lista de los principales actos de agresión y, por otra, una fórmula general destinada a englobar todos los demás actos que no figuraran en la lista. Por otra parte, ese es el método que se empleó para redactar el artículo 9 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, de 1947.

18. Además, en el proyecto de resolución de la URSS no se tiene en cuenta el elemento subjetivo ni las atribuciones que, en virtud de la Carta, poseen ya algunos órganos de las Naciones Unidas. En la enmienda de Colombia (A/C.6/L.210) parece hacerse un esfuerzo por suprimir esas lagunas.

19. Para terminar, el Sr. El Barazi declara que, teniendo confianza en las Naciones Unidas, y con el deseo sincero de forjar un mundo mejor, se hará reinar la paz.

20. El Sr. BUSTAMANTE (Ecuador) reconoce que los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional se han desarrollado en un terreno jurídico. Dicha Comisión se ha esforzado en formular una definición de la agresión. Incorporó esta tarea a la que también le había confiado la Asamblea General, de elaborar un proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.

21. El debate que se desarrolla en la Sexta Comisión excede de los límites de una cuestión puramente jurídica y repercute sobre el problema de la paz y la seguridad internacionales, lo que demuestra la importancia de ese debate. El Sr. Bustamante estima que la cuestión tiene un carácter indudablemente jurídico, pero que en el fondo se trata de una cuestión política, puesto que atañe a la estructura de la seguridad colectiva. Esto es lo que se reconoce en el quinto considerando del proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.209). Acaso hubiera sido preferible que la Primera Comisión se ocupara de este asunto, como en el quinto período de sesiones; sin embargo, la Sexta Comisión es ciertamente competente para examinarlo.

22. La definición de la agresión tiene evidentemente su lugar en el código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, pero excede en gran medida ese marco estrecho. Ese código trata de la responsabilidad individual por los delitos de derecho internacional, entre los cuales figura la agresión; en consecuencia, considera la agresión desde el punto de vista de la justicia penal internacional, cuando ha habido indiscutiblemente una agresión. Por el contrario, la

Comisión trata de saber en qué condiciones se puede decir que ha habido agresión; y ha de estudiar el efecto de la determinación de la agresión dentro del sistema de seguridad colectiva creado por la Carta. En este terreno la cuestión de la policía internacional es evidentemente primordial. Por lo tanto, para la Comisión se trata de un problema a la vez político y jurídico. No parece, pues, que convenga examinar simultáneamente dos problemas diferentes, ni subordinar el estudio de un problema político a las decisiones tomadas en un problema jurisdiccional. Quizá lo contrario sería más lógico. El representante de Venezuela (283a. sesión) ha precisado que, al examinar el proyecto de código, la Asamblea General podría decidir la inclusión en ese código de una definición de la agresión, o bien formular una definición separada, o declarar que no hay necesidad de definir la agresión. A juicio de la delegación del Ecuador, para tomar semejante decisión, la Asamblea General habría de tener en cuenta consideraciones políticas, y tratar de perfeccionar el sistema de seguridad colectiva, reforzando las garantías contra la agresión; en el código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, deben tener primacía, por el contrario, las consideraciones jurídicas.

23. La delegación del Ecuador, por tanto, no podrá votar a favor del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto conjunto de resolución. Por el contrario, aprueba las disposiciones contenidas en el párrafo 2 de dicho proyecto, aunque piensa que los Gobiernos habrían de transmitir sus comentarios sobre la definición de la agresión independientemente de sus comentarios sobre el proyecto de código.

24. En consecuencia, si conviene resolver la cuestión teniendo en cuenta sus incidencias políticas, hay que preguntarse cuál es el objetivo que tendría que buscar la Asamblea General al aprobar una decisión respecto a la definición de la agresión. Evidentemente, el de fortalecer la paz y acrecentar la eficacia del sistema de seguridad colectiva. En todo caso, tal es el fin que ha perseguido la delegación del Ecuador al estudiar esa cuestión.

25. Se ha planteado ante todo la cuestión de si, desde el punto de vista de la eficacia del sistema de seguridad colectiva, conviene o no definir la agresión. Se sabe que en virtud del Artículo 39 de la Carta el Consejo de Seguridad está encargado de determinar la existencia de todo acto de agresión y de adoptar las medidas necesarias para restablecer o mantener la paz. Si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, no puede llenar sus funciones, la Asamblea General, según la resolución 377 (V), examina la cuestión y dirige a los Estados Miembros recomendaciones para la adopción de medidas colectivas que eventualmente pueden consistir en el empleo de la fuerza. Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General deben, por tanto, examinar en primer término la cuestión y decidir si existe una amenaza contra la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión.

26. Algunos han pretendido que es absurdo definir el más estricto de los tres criterios, es decir, la agresión, cuando una cualquiera de las tres situaciones comprobadas sirve de base para una acción idéntica de las Naciones Unidas. Otros han insistido en que las medidas que se adopten serán esencialmente medidas de policía, y en que solamente estas medidas son importantes para impedir la agresión; el encargado de juzgar decidirá luego si ha habido o no agresión y quién es responsable de ella. Hay que advertir que existen diferencias funda-

mentales entre las medidas que se adopten, según se trate de una amenaza contra la paz, de un quebrantamiento de la paz o de un acto de agresión. En los dos primeros casos, en que la paz está amenazada o rota a consecuencia de equívocos o de la oposición de intereses entre dos o varios Estados, sin que se pueda determinar quién es el agresor y quién la víctima, el Consejo de Seguridad o la Asamblea General se esforzarán en conciliar a las partes, en disipar los equívocos o en lograr la suspensión de las hostilidades, si hubieren comenzado. No emplearán la fuerza armada sino como último recurso. Y esta medida no es deseable puesto que habrán de elegir entre dos países que quizá obran de buena fe y que, sin intención agresiva, se han visto arrastrados a un conflicto violento. El recurso a la fuerza parece por tanto reservado al tercer caso previsto, es decir, al acto de agresión. La decisión más grave que se pueda tomar dentro del sistema de seguridad colectiva supone, pues, la comprobación previa del acto de agresión.

27. Algunos han dicho también que la definición de los actos de agresión podría ser útil al agresor, haciendo más difícil la acción de la víctima o de los órganos competentes de las Naciones Unidas, y ofreciendo al agresor la posibilidad de utilizar tal definición con fines delictuosos. Se ha hecho también notar que toda definición sería forzosamente incompleta y que podrían producirse nuevos casos, imposibles de prever en el momento actual. En lo que se refiere al método mixto que comprendería a la vez una definición de la agresión y la posibilidad para los órganos competentes, de determinar los casos de agresión no previstos en ella, algunos han objetado que ese método daría por resultado la creación de dos categorías de actos de agresión; unos que podrían ser inmediatamente identificados, y otros, indudablemente los más peligrosos, que habrían de ser objeto de un examen atento, en detrimento de la acción rápida de las Naciones Unidas.

28. Todas estas objeciones parecen proceder de una misma preocupación, la de las ventajas que un agresor obtendría de la definición de la agresión. Pero un método mixto, que consistiera en dar una definición abstracta, o en describir actos de agresión característicos, o en combinar ambas definiciones; y que además reconociese expresamente la competencia de los órganos autorizados de las Naciones Unidas para determinar cualquier otro acto de agresión no comprendido en la definición, respondería a la objeción que puede formularse al carácter incompleto de toda definición. En lo que se refiere a la objeción de que ese método crearía dos categorías de actos de agresión, unos ya previstos y otros nuevos e inventados por el agresor para burlar la definición, se puede señalar que la comunidad internacional debe considerar estos últimos como los más graves. En efecto, la premeditación sería entonces flagrante, puesto que el Estado que los cometiese habría tratado deliberadamente de eludir la justicia. Conveniría introducir en la definición una declaración en este sentido.

29. Se dice que toda definición contiene términos cuyo contenido exacto ha de ser a su vez precisado. Pero el agresor que tratara de eludir las consecuencias de su acto no necesitaría invocar la imprecisión de los términos de la definición; podría plantear cuestiones de competencia, invocar dudas sobre lo que se entiende por territorio de un Estado, independencia política, empleo de la fuerza, amenazas, etc. También se dice que la definición de la agresión podría ser utilizada para lanzar falsas acusaciones contra un país inocente.

Pero el problema que se plantea entonces es absolutamente independiente de la definición de la agresión; es el de la comprobación de los hechos. El agresor saca siempre ventajas de la confusión de la situación y de la obscuridad que existe en lo que concierne a las normas aplicables para su enjuiciamiento. Para remediar esta situación existen por una parte órganos de observación y de investigación; por otra parte, sería necesario que los órganos encargados de determinar la agresión dispusiesen de normas tan claras y precisas como fuese posible. El debate desarrollado hasta ahora demuestra la necesidad de tales normas. Los diversos criterios expresados revelan la existencia de una situación muy grave.

30. Para algunos, la agresión no puede consistir sino en actos materiales; para otros, pueden existir casos de agresión por omisión. Algunos han puesto en duda el carácter agresivo del bloqueo, mientras que otros, especialmente la delegación del Ecuador, consideran que por su misma naturaleza el bloqueo es un acto de agresión. Las mismas divergencias existen respecto a la agresión indirecta, tal como el envío de "voluntarios", o la agresión económica, cuya importancia y peligros han señalado los representantes de Bolivia y de Colombia. Una situación semejante no puede sino regocijar al agresor que sabe que ante un hecho concreto se manifestarán nuevas divergencias que entorpecerán la acción colectiva. Eso demuestra que las Naciones Unidas han de establecer un criterio preciso en lo que concierne a los actos de agresión.

31. Los que han declarado que una definición de la agresión retardaría la acción de los órganos competentes de las Naciones Unidas, en beneficio del agresor, han señalado asimismo que la definición podría obligar a esos órganos a determinar prematuramente quién es el agresor, cosa que quizá fuera preferible no hacer, en interés de la paz y de la seguridad internacionales. Sin embargo, ¿es eso deseable? El representante de Grecia ha aludido a la agresión de que ha sido víctima su país, y al hecho de que ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General han calificado nominalmente al agresor. En ello se encuentra acaso la esencia misma de las objeciones formuladas contra la definición de la agresión. Si se acepta esta idea, todo eventual agresor que disponga de fuerzas y de recursos suficientes podría lanzarse por la vía de la agresión, sabiendo, o esperando al menos, que el Consejo de Seguridad o la Asamblea General no lo condenarían y estarían tentados de callar el delito y de negociar la paz, dispuestos a sacrificar a la víctima o a ponerla en pie de igualdad con el agresor. Pero si se admite la posibilidad de sacrificar a un inocente para calmar al agresor, por lo menos no es necesario proclamarlo, indicando así al agresor eventual que tiene el camino libre.

32. También se dice que una definición de la agresión sería inútil porque no sería obligatoria para el Consejo de Seguridad. Examinando el procedimiento que ha de seguir el Consejo de Seguridad para comprobar la existencia de la agresión, el Sr. Bustamente advierte que el Consejo de Seguridad ha de averiguar examinando las circunstancias y los móviles, si el acto de que se trata está o no justificado. En el párrafo 2 del proyecto de resolución de la URSS (A/C.6/L.208) se enumeran precisamente los móviles que no pueden ser admitidos como justificantes. Algunas delegaciones han hablado de lo que podría constituir justificación suficiente para que un acto que aparezca materialmente como acto de agresión, no sea calificado de tal. Se puede decir que estando reconocido el hecho material, existe una presun-

ción de intención agresiva por parte de quien lo comete, salvo si puede probar lo contrario. De todos modos, a los órganos competentes y no a un Estado que actúe unilateralmente, es a quienes corresponde decidir si ha habido intención agresiva. En cuanto a los móviles, se trata de causas determinantes del acto y no de sus efectos. Siempre será difícil saber cuáles son los móviles que pueden admitirse para justificar un acto agresivo; pero es posible saber cuáles no serán nunca aceptados como justificantes; éste es el caso de los móviles enumerados en la segunda parte del proyecto de la URSS.

33. Habiendo comprobado así la utilidad de la definición de la agresión, el Sr. Bustamante se pregunta si esa definición es posible. Los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional no constituyen sino un primer elemento, indudablemente muy útil, para un estudio que hay que continuar. El debate que se desarrolla en la Comisión aporta también elementos útiles. Por otra parte, sería conveniente estudiar las definiciones concretas que existen en los tratados vigentes. Finalmente, sería necesario examinar cuidadosamente las objeciones hechas a los proyectos de resolución constructivos presentados a la Comisión. En las actuales circunstancias, la delegación del Ecuador no está en condiciones de apoyar un proyecto de resolución determinado. Le parece interesante el proyecto de resolución de Bolivia (A/C.2/L.211), porque establece la prohibición de la agresión indirecta y se refiere a la agresión económica y a la amenaza de agresión. En la etapa actual del debate, parece que no se someterán a votación los proyectos de resolución constructivos. Pero si se decidiera lo contrario, la delegación del Ecuador votaría en favor de algunos pasajes concretos o decidiría abstenerse, ya que necesitaría algunas aclaraciones.

34. El Sr. Bustamante espera que los que se han opuesto a la definición de la agresión aceptarán, sin embargo, que se prosiga el estudio de la cuestión. Estima que la creación de una comisión especial, propuesta por la delegación de Colombia en su enmienda (A/C.6/L.214), al proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.209), constituiría una excelente solución.

35. El Sr. ABDOL (Irán) recuerda las diferentes opiniones expresadas en la Comisión durante el largo y minucioso debate dedicado al problema de la definición de la agresión, cuya importancia es considerable y al que la Comisión de Derecho Internacional no ha podido aportar una solución debido al poco tiempo de que disponía. Algunos representantes estiman que es imposible formular una definición completa y hacen hincapié en los graves peligros de una definición incompleta. Otros piensan que es posible lograr una definición precisa de la agresión, basándose en la enumeración contenida en el proyecto de resolución de la URSS. Hay todavía otros que consideran posible formular una definición abstracta de la agresión. Numerosas delegaciones desearían combinar las ventajas del sistema analítico y del sintético. Finalmente, algunas piensan que, en cierta medida, la cuestión de la definición de la agresión está ligada a la del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad; por consiguiente, preconizan el estudio simultáneo de esas dos cuestiones, una vez que los gobiernos hayan hecho conocer sus observaciones sobre el proyecto de código así como sobre la definición de la agresión. La delegación del Irán comparte esta última opinión. Estima que es posible calificar la agresión, si no definirla lógicamente; y que no hay que descorazonarse por el fracaso de las tentativas realizadas hasta la fecha. Durante los últimos 25 años se ha

abordado este problema, cuando los Estados no estaban dispuestos a aceptar la limitación del derecho a la guerra justa, reconocido hasta una fecha reciente. Por definición de la agresión, la delegación del Irán entiende la calificación del acto, que permita a los órganos de las Naciones Unidas y a todo órgano jurisdiccional contar con los elementos suficientes para poder identificarlo como acto de agresión.

36. El Sr. Abdoh no comparte la opinión del representante de Grecia, que considera la agresión como una "noción natural". El acto de agresión se compone, en realidad, de elementos materiales que pueden ser calificados. La calificación sería útil porque permitiría determinar al agresor y tomar rápidamente las medidas previstas en la Carta. Además, serviría los intereses de los países pequeños y medianos, que son siempre las primeras víctimas de una agresión. La delegación del Irán no se hace ilusión alguna sobre la eficacia de esa calificación para impedir los actos de agresión, puesto que un agresor eventual vacilará solamente ante las sanciones que se le puedan imponer. No obstante, es indudable que en la comunidad internacional actual, en que ciertas Potencias tratan de justificar sus actos de agresión mediante consideraciones políticas, económicas y estratégicas, la calificación de la agresión podría ser útil a los países medianos y pequeños, que no disponen de fuerzas y medios suficientes para asegurar su propia defensa. La definición podría hacer vacilar a los que mediante la amenaza de una agresión o la agresión misma, tratan de minar la resistencia de los pueblos que desean defender su independencia política y económica.

37. En lo que se refiere al proyecto de resolución de la URSS, la delegación del Irán, aunque reconoce que la enumeración que en él figura no es completa, estima que aporta una contribución importante al derecho internacional. Atribuye especial importancia al párrafo 2 de ese proyecto de resolución. Estima, en efecto, que es necesario determinar en toda definición de la agresión que ninguna consideración de carácter político, estratégico o económico, ni otras consideraciones de carácter social, pueden servir para justificar actos de agresión. Recuerda las amenazas de agresión que se han hecho recientemente, y que se ha tratado de justificar pretendiendo que la vida y los bienes de los nacionales de un país extranjero se encontraban en peligro; afirmación, por otra parte desmentida por los hechos.

38. El Sr. Abdoh no cree, además, que la enumeración que figura en el proyecto de la URSS equivaldría a la negación del derecho internacional y que, como ha insinuado el representante del Reino Unido (281a. sesión), sería como invitar a los países a cometer actos contrarios al derecho internacional, dándoles la certeza de que toda medida de represalia que implicase el uso de la fuerza sería estigmatizada inmediatamente como un acto de agresión. Parece que el representante del Reino Unido se haya esforzado en hacer admitir que las medidas de represalia que impliquen el uso de la fuerza están autorizadas, por ejemplo, cuando tengan por finalidad continuar la explotación de un Estado que, según la Carta, posee el derecho de igualdad soberana; si es ésta la intención del representante del Reino Unido, el Sr. Abdoh protesta enérgicamente contra esa manera de pensar que es contraria a todos los principios del derecho internacional.

39. Por otra parte, el Sr. Abdoh se ve obligado a referirse a algunos otros puntos de la declaración hecha por el representante del Reino Unido, a fin de señalarle el alcance exacto de su declaración. Con cierta

inquietud, el Sr. Abdoh ha oído declarar al representante del Reino Unido que en el momento en que, en un caso dado, se trata de determinar al agresor, es necesario tener en cuenta los motivos y las circunstancias, añadiendo que, por ejemplo, la invasión deliberada del territorio de un Estado, con fines de conquista, constituye abiertamente una agresión. Uno puede preguntarse si esa afirmación quiere decir que la invasión sólo constituiría un acto de agresión si se realizara con fines de conquista. También tiene graves consecuencias la afirmación de que, en el caso de tratarse claramente de una agresión, sea conveniente abstenerse de declarar que el Estado interesado es el cuenta agresor; esta actitud es indefendible, si se tiene en cuenta que la misión de las Naciones Unidas consiste en mantener la paz por la justicia y no haciendo burla de ella.

40. En cambio, el Sr. Abdoh está de acuerdo con el representante del Reino Unido en que la agresión tiende casi siempre a obligar al Estado víctima a ceder ante la voluntad del agresor, objetivo que es posible alcanzar casi con la misma seguridad recurriendo a la subversión, sin necesidad de emplear la fuerza material.

41. En resumen, la delegación del Irán estima, en primer lugar, que aunque la Comisión de Derecho Internacional no haya logrado formular una definición concreta de la agresión, no deja de ser posible definirla; en segundo lugar, que esta definición podría servir de orientación a los órganos de las Naciones Unidas y al mismo tiempo, tener carácter obligatorio para un organismo jurisdiccional que se creara en el porvenir.

42. Esta delegación considera, además, que la cuestión de la definición de la agresión está ligada a la del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y que, por consiguiente, hay que estudiar simultáneamente estas dos cuestiones. Esto no significa que la Asamblea General tenga que dar una respuesta definitiva sobre las dos cuestiones al mismo tiempo; en su séptimo período de sesiones, la Asamblea General podrá aportar una solución definitiva a ambos problemas o, si considera que la aprobación del proyecto de código no es oportuna, limitarse a resolver el problema de la definición de la agresión. Por lo tanto, el examen simultáneo de esas dos cuestiones no contribuiría, como parecen temerle algunas delegaciones, a aplazar excesivamente la solución del problema de la definición de la agresión.

43. Finalmente, aunque la delegación del Irán reconoce que el proyecto de resolución de la URSS y las enmiendas que se le han hecho constituyen una importante aportación al derecho internacional, no está por el momento en condiciones de apoyar ese proyecto de resolución y esas enmiendas. Estima que un intento serio de combinar los métodos analítico y sintético podría contribuir a establecer una definición satisfactoria de la agresión.

44. El Sr. SASTROAMIDJOJO (Indonesia) declara que muchas de las observaciones que tenía intención de hacer, en un tema que es el más importante del programa de la Comisión, han sido ya formuladas por los oradores precedentes. Se limitará, pues, a insistir sobre ciertas observaciones que le parecen insuficientemente expuestas.

45. El Sr. Sastroamidjojo estima que, durante el debate general, se han expresado tres opiniones distintas. Algunos representantes piensan que no es necesario definir la agresión, ya sea porque, desde el punto de vista jurídico, sea imposible dar una definición precisa, o porque, desde el punto de vista político,

una definición presente graves riesgos. Otros consideran que es posible definir la agresión mediante una fórmula abstracta o mediante una enumeración de algunos actos de agresión. Finalmente, existe un tercer grupo que, sin negar la posibilidad de una definición, estima conveniente aplazarla hasta que haya mejorado la situación internacional.

46. En su calidad de país joven, insuficientemente desarrollado y, por consiguiente, débil, Indonesia se siente más vulnerable que otros países ante una agresión. Resuelta a conservar una libertad y una soberanía reconquistadas, Indonesia concede importancia especial a la cuestión de la definición de la agresión.

47. La delegación de Indonesia no cree que, desde el punto de vista jurídico, sea imposible definir la agresión con una fórmula abstracta o enumerando cierto número de actos de agresión, o combinando los dos métodos que, como ya se ha hecho notar, son utilizados en el derecho privado y en el derecho internacional para definir términos jurídicos. Ciertamente la tarea no es fácil, pero el hecho de que los esfuerzos realizados hasta la fecha hayan fracasado no obliga a pensar que sea imposible el éxito. Todo el mundo sabe que lo que hoy se ha convertido en realidad parecía jurídicamente imposible en el siglo XIX³ incluso en vísperas de la primera guerra mundial. Las Naciones Unidas constituyen un ejemplo de ello. Pero las Naciones Unidas sólo pudieron ser creadas gracias a la voluntad y a la cooperación de todos los Estados. El representante de Indonesia estima que lo mismo se puede decir de la agresión, y reconoce, junto con el representante de Birmania, que sólo una cooperación verdadera entre todos los Estados puede conducir a la elaboración de una definición que impida la agresión. El representante de Indonesia piensa que hay que buscar esa definición en función del desarrollo progresivo y de la codificación del derecho internacional, como se definen en el artículo 15 del Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional.

48. La delegación de Indonesia lamenta que la Comisión de Derecho Internacional se haya limitado en su estudio al *animus agresionis* y no a la finalidad última que persigue el agresor. El objetivo del agresor es siempre, en última instancia, dominar al Estado víctima o anexarse una parte de sus territorios o, por lo menos, obtener una gran influencia en la política interior y exterior de tal Estado. El representante de Indonesia cita, en apoyo de esta afirmación, los comentarios del Presidente Wilson y de Baker al Artículo 10 del Pacto de la Sociedad de las Naciones³.

49. Ahora bien, este objetivo se puede alcanzar no sólo mediante la amenaza o el empleo de la fuerza, sino también mediante lo que se acostumbra a llamar "la penetración pacífica". Como ha hecho notar el representante de los Países Bajos, al que hay que felicitar por su franqueza, una nación puede someter a otra mediante la agresión "militar", o mediante la agresión "económica" o "ideológica". La historia ofrece muchos ejemplos de agresiones económicas o ideológicas, y el Sr. Sastroamidjojo estima que la agresión económica o ideológica es tan peligrosa como la agresión militar. Algunos miembros de la Comisión han hecho notar también que esas formas de agresión indirecta son más peligrosas que la agresión directa, teniendo en cuenta que es más difícil determinar en estos casos si se trata verdaderamente de una agresión o de una ayuda real y desinteresada al Estado víctima, especialmente cuando éste no ha solicitado tal asistencia.

³ Véase: *Oppenheim's International Law*, Seventh Edition, edited by H. Lauterpacht, Londres, 1948, página 356.

50. En estas circunstancias, el representante de Indonesia no comparte la opinión de los representantes que han estimado que al definir la agresión convendría no alejarse de la Carta, en la cual cada vez que se menciona la agresión, se hace referencia a la agresión material y no a otras formas de agresión. Los propósitos y principios de las Naciones Unidas, expresados en la Carta, son preservar la paz y condenar la subyugación de un Estado por otro, sobre todo por vía de agresión; en estas condiciones, el Sr. Sastroamidjojo no cree que sea alejarse de los términos de la Carta dar a la palabra "agresión" un significado más sutil, que tenga en cuenta las diversas formas que puede adoptar la subyugación de un Estado por otro.

51. En cuanto a la propuesta de aplazar la solución de este problema hasta el próximo período de sesiones de la Asamblea General, el delegado de Indonesia considera que la aprobación en el quinto período de sesiones de la resolución 277 (V) ("Unión pro paz") y, en el actual período, de las resoluciones relativas a las medidas que podrían emplearse para mantener y fortalecer la paz y la seguridad internacionales (A/L.26), exige que se llegue a una solución de este problema durante el actual período de sesiones. Además, si bien el estado de las relaciones internacionales puede mejorar hasta el año próximo, puede también empeorar y la cuestión de la definición de la agresión es demasiado importante para subordinar su solución a especulaciones sobre el estado de la situación internacional durante el próximo período de sesiones.

52. La delegación de Indonesia opina que en esta definición, cualquiera que sea la forma que adopte, se debe hacer hincapié en el objetivo último de toda agresión, aparte de los medios utilizados por el agresor para alcanzar sus fines. En este orden de ideas, la delegación de Indonesia apoya la sugestión del representante del Pakistán, encaminada a insertar en la definición una disposición sobre la agresión económica u otras formas de agresión indirecta.

53. La delegación de Indonesia apoyará todo proyecto de resolución o enmienda que, en general, se adapte a las ideas que el Sr. Sastroamidjojo acaba de expresar; y se reserva el derecho de presentar enmiendas en una etapa ulterior del debate.

54. El Sr. BERNSTEIN (Chile) pide que, en cumplimiento del artículo 114 del reglamento, se le permita responder a algunas observaciones hechas, en la 287a. sesión, por el representante de Bélgica.

55. El representante de Bélgica se mostró sorprendido de la afirmación — y aparentemente se refirió a la intervención del representante de Chile — de "que frente a una amenaza armada la persona amenazada tiene que esperar hasta que el golpe haya sido asestado antes de adoptar medidas de legítima defensa". El Sr. Bernstein invita al representante de Bélgica a consultar el acta resumida de la 281a. sesión en que se reproduce el texto de su declaración. Allí se indica que la delegación de Chile "no puede aceptar la sugestión que se ha formulado de que un Estado que se crea amenazado por otro Estado podría provocar la guerra sin ser calificado de agresor". El Sr. Bernstein añadió que, en el terreno de la legislación penal de los Estados, a la que se hizo referencia a título de comparación, "no hay ningún código penal de ningún país civilizado que autorice semejante legítima defensa de carácter preventivo. Una persona que cree que se producirá un ataque puede tomar precauciones, pero si mata a su adversario antes de haber sido atacada, es un delincuente". Estas

son las palabras que el Sr. Bernstein pronunció realmente en la sesión a la que se refirió el representante de Bélgica.

56. Para apoyar esta afirmación, el Sr. Bernstein cita las disposiciones pertinentes de los códigos penales de Chile, Países Bajos, Italia, Francia y Polonia (Código de 1932). En todos estos códigos se califica la legítima defensa como un acto requerido por necesidad real de la defensa propia o de la de otra persona, o por un acto de violencia actual e injusto, o por un ataque súbito e ilegal, en pocas palabras, por un comienzo de ejecución. En el código penal de Chile se imponen incluso ciertas restricciones, puesto que se prevé "la necesidad razonable del medio utilizado para rechazar el ataque" y porque se indica que no ha de haber mediado provocación por parte del que invoca la legítima defensa. En ninguno de esos códigos se justifica el ataque contra una persona por el mero hecho de atribuirle intenciones agresivas. El código penal belga, del cual cita el Sr. Bernstein los artículos 416 y 417, tampoco es una excepción y de la jurisprudencia belga se deduce que en numerosos casos se ha definido la legítima defensa presuponiendo un ataque real.

57. El Sr. Bernstein no desea iniciar una polémica sobre este punto con el representante de Bélgica, pero desea repetir lo dicho en su precedente intervención, a saber, que una persona que tenga razones para temer un ataque, tiene el derecho y el deber de ser prudente y estar dispuesta a defenderse; pero si mata antes de ser atacada, se convierte en delincuente. Igualmente, en el orden internacional, ningún Estado puede justificar el uso de la violencia contra otro Estado por el hecho de sospechar que éste abrigue intenciones agresivas.

58. El Sr. VAN GLABBEKE (Bélgica), a su vez, invoca el artículo 114 del reglamento para que se le autorice a responder al representante de Chile.

59. El Sr. van Glabbeke señala que las consideraciones desarrolladas en la Comisión con respecto a la legítima defensa se explican precisamente por la estrecha correlación que existe entre esta noción y la de agresión. Como ha advertido el propio representante de Bélgica, si se amplía una de estas dos nociones es necesario restringir automáticamente la otra. El representante de Bélgica no está seguro de que todos los miembros de la Comisión estén de acuerdo sobre el significado exacto que ha de darse a las palabras "legítima defensa" y "agresión", tanto en derecho privado como en derecho internacional.

60. El Sr. van Glabbeke continúa sorprendido de que se diga que una persona que sea objeto de un ataque a mano armada tenga que esperar a que se le haga un disparo para poder utilizar un arma; y sigue pensando que si se aceptara esa concepción, el derecho de legítima defensa sería ilusorio en numerosos casos.

61. Indudablemente, en los diversos códigos penales se señala que el ejercicio del derecho de legítima defensa ha de ser suscitado por un ataque, un comienzo de ataque, un acto de violencia, la necesidad actual, etc.; pero sería conveniente saber lo que se entiende exactamente por esos términos. Por su parte, el orador estima que no se puede pedir a una persona que, para defenderse, espere a que se le haya hecho un primer disparo; desde el momento en que el ataque se ha exteriorizado, la persona tiene el derecho indudable de defenderse.

62. En lo referente a los artículos 416 y 417 del código belga, que ha citado en su intervención, el orador señala que esas dos disposiciones se refieren a dos casos muy diferentes, contra lo que el representante de la

URSS parecía creer, en su reciente intervención (288a. sesión).

63. En el artículo 416 se prevé el caso en que, por ejemplo, en la vía pública, un individuo apunte un arma contra otro; la persona amenazada tiene derecho a pensar que esa arma está cargada, aunque en realidad no lo esté. A partir de ese momento, puede considerarse en estado de legítima defensa y utilizar un arma cargada, si la tiene a su disposición.

64. En el artículo 417 se trata el caso de una persona, armada o no, que penetre durante la noche en la propiedad privada de otra persona, franqueando así de algún modo la frontera que limita los territorios perte-

necientes a esta persona (y éste es el elemento que el artículo 416 no contiene), lo que da a la persona cuya propiedad está amenazada el derecho a considerarse en estado de legítima defensa.

65. Indudablemente, en derecho internacional, se puede considerar que, a partir del momento en que una amenaza directa contra un Estado se manifiesta por los signos precursores de un ataque, el Estado amenazado se encuentra en el caso de legítima defensa y su jefe está autorizado a ejercer el derecho que de ello se deduce.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.